

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS



La Plata, 02 de julio de 2014.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN

*LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES*

DECLARA

Su homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados "Aníbal Verón", al cumplirse doce años de sus asesinatos a manos de la Policía Bonaerense en medio de la feroz represión conocida como la "Masacre de Avellaneda" en el Puente Pueyrredón, el 26 de Junio del 2002, cuando miles de trabajadores desocupados se manifestaban reclamando subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con la fábrica ceramista Zanón ante el peligro de ser desalojada.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DIP. C. CASTILLO', written over a horizontal line.

DIP. C. CASTILLO

FUNDAMENTOS

El pasado 26 de Junio se cumplieron doce años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en la feroz represión a miles de trabajadores desocupados en el Puente Pueyrredón.

La masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno del entonces Presidente Eduardo Duhalde. El resultado de dos muertos, más de 30 heridos de bala de plomo y una cacería que se extendió por más de veinte cuadras a la redonda, fueron la respuesta a las enormes movilizaciones que se desataron el 19 y 20 de diciembre, en el marco de una enorme crisis económica, social y política.

A doce años del asesinato de Darío y Maxi, varios de los responsables políticos siguen impunes y hasta siguen siendo funcionarios importantes del gobierno nacional (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich) y de la oposición, como Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi. Otros, como José Genoud y Carlos Soria -jefe de la SIDE en aquel entonces y luego gobernador de Río Negro por el Frente para la Victoria- murieron en la impunidad.

La masacre de Avellaneda contó con la complicidad de los medios de comunicación y los empresarios. El ejemplo más emblemático fue la tapa del diario Clarín que titulaba "No se sabe aún quienes dispararon contra los piqueteros. La Crisis causó dos nuevas muertes" cuando a la noche del 26 de Junio ya se sabía que había sido la policía. En la editorial sostenía que "los piqueteros fueron a buscar muertos" Y en el análisis de Julio Blanck de ese mismo día, se leía que los que ganan con estas muertes "son las organizaciones que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política".

La masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado contra el movimiento de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y fábricas recuperadas que enfrentó a los gobiernos de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la destrucción de la salud y la educación públicas.

En la masacre de Avellaneda participaron las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE. Apostaron francotiradores, infiltraron agentes de civil, reclutaron policías retirados para que participaran de la cacería, asaltaron e incendiaron un colectivo de línea para culpar a los manifestantes. El registro fotográfico demostró la responsabilidad de los policías Fanchiotti y Acosta en los crímenes de Darío y Maxi.

Al día siguiente, una enorme movilización ganó la Plaza de Mayo para denunciar la salvaje represión y reclamar justicia. El repudio se multiplicó en todas las plazas del interior del país y volvió a ganar las calles durante las semanas siguientes. Finalmente, Duhalde anticipó las elecciones presidenciales.

El gobierno kirchnerista ha sido el garante de la impunidad durante estos doce años. Jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la SIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense.

El juez Ariel Lijo archivó hace un año la causa iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la masacre sin haber adoptado ninguna medida de prueba. Nunca solicitó los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades policiales y de seguridad realizadas antes, durante y luego de la represión del 26 de junio del 2002, como le fue reclamado.

Gracias a la movilización popular se logró la condena a prisión perpetua de los autores materiales del homicidio de Darío y Maxi, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Sin embargo, a la impunidad de los autores políticos de la masacre debe sumarse la de los policías y represores involucrados. Aparte de Fanchiotti y Acosta, apenas un puñado recibió otras penas por delitos menores. Como la Corte Suprema no ratificó aún esas condenas, se acercan a la prescripción.

A doce años, no solo los responsables políticos siguen impunes sino que también los motivos por los que reclamaban Darío Santillán y Maximiliano Kosteki siguen vigentes por que la mitad de la clase trabajadora está precarizada y sin derechos laborales, la cuarta parte de la población vive en la pobreza y centenares de miles de trabajadores aún revisten en las filas de la desocupación mientras crecen los despidos y suspensiones.

Es por eso que rendimos homenaje a Darío y Maxi y pedimos a los diputados que acompañen el presente proyecto de declaración.



DIP. C. CASTILLO.